2.17. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN MURCIA (pp. 2-7)

2.17. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A MÚRCIA (pp. 8-13)

SANTIAGO M. ÁLVAREZ CARREÑO

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de dret administratiu

Universidad de Murcia

EDUARDO SALAZAR ORTUÑO

Abogado / Advocat

Sumario: 1. Puertos y medio ambiente: sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 21 de mayo (rec. 122/2005) y de 18 de junio de 2010 (rec. 276/2005). 2. Antenas de telecomunicaciones: Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 18 de junio de 2010 (Rec. 601/2008). 3. Ruidos: Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 25 de junio de 2010 (Rec. 606/2008). 4. Costas: Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Murcia de 8 de julio de 2010 (Rec. 65/2006). 5. Vertidos: sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 28 de julio (Rec. 780/2005) y de 24 de septiembre de 2010 (Rec. 3261/2003)

El análisis de la actividad jurisdiccional referida a la aplicación del derecho ambiental en la Región de Murcia pasa en este semestre por analizar fundamentalmente las sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo, dada la escasez de pronunciamientos en materia de delitos ecológicos o responsabilidad por daños al ambiente en otras sedes jurisdiccionales.

El estudio de las resoluciones de este tribunal nos permite comprobar qué conflictos acceden a los tribunales regionales, y en este trimestre, salvo en lo relativo a un proyecto de puerto deportivo que afecta al interés público y la defensa del derecho humano a la intimidad en relación con el ruido, podemos indicar que la mayoría de ellos han tenido que ver con la defensa de intereses privados no ambientales en relación con las labores de policía ambiental que tienen que ver con la orden de desinstalación de una antena de telefonía móvil, la imposición de sanciones en materia de costas o vertidos al medio acuático, o bien asuntos referidos a subvenciones y ayudas agrícolas.

1. Puertos y medio ambiente: sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 21 de mayo (rec. 122/2005) y de 18 de junio de 2010 (rec. 276/2005)

Inicialmente encontramos un caso referido al proyecto de un nuevo puerto deportivo en La Manga del Mar Menor que, por tratarse de un conflicto entre administraciones y, en parte, con la sociedad civil —representada por grupos de conservación de la naturaleza tales como Greenpeace y la Asociación de Naturalistas del Sureste—, sirve como botón de muestra de la política ambiental en relación con decisiones sobre infraestructuras con gran impacto. Las acciones judiciales, pese a ser similares, se plantearon separadamente y generaron las sentencias de 21 de mayo y de 18 de junio de 2010.

El caso de Puerto Mayor es un caso complejo desde el punto de vista procedimental —que además ha generado dos sentencias del Tribunal Supremo— al que se añaden cuestiones competenciales y la cuestión de la aplicación sobrevenida de normas ambientales a un proyecto portuario aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de normas esenciales para la evaluación ambiental de los

proyectos o de protección de la biodiversidad marina. La resolución de esta coyuntura, con innegable impacto socioeconómico y ambiental en una zona litoral en la que el equilibrio de usos es crucial, ha supuesto además un conflicto sociopolítico y competencial que subyace a la decisión judicial al afectar al dominio público marítimo-terrestre y al medio natural. Las obras se suspendieron mediante la adopción de medida cautelar el 17 de marzo de 2005, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.

El proyecto de puerto deportivo en el Estacio se basa en una concesión de 4 de julio de 1975, habiendo sido su plazo de ejecución prorrogado en dos ocasiones y su proyecto modificado mediante Resolución administrativa autonómica de 16 de diciembre de 1988. La ejecución del puerto fue suspendida posteriormente por la extinta Agencia Regional de Medio Ambiente en abril de 1989 y esa suspensión fue levantada por orden del director general de Calidad Ambiental en el 2003. La cuestión ambiental de fondo, más allá de lo referido a la legislación en materia de puertos, se refiere a la existencia o no de una adecuada evaluación ambiental de la obra dada la presencia de hábitats comunitarios marinos en los alrededores del proyecto (*Posidonia oceanica*), lo que generó denuncias por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil una vez iniciadas las obras en abril del 2004. Debe remarcarse que el proyecto modificado del puerto incluía la construcción de viviendas, lo que suponía una actividad urbanística más allá de la portuaria.

El objeto de la controversia judicial se basó, no obstante, en la desatención por parte del órgano autonómico de tres solicitudes de revisión presentadas tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por las dos asociaciones de protección de la naturaleza frente al levantamiento de la suspensión en el 2003, frente a la modificación del proyecto en 1988 —contrario a la normativa de evaluación de impacto ambiental en vigor desde 1986 conforme a informes internos del órgano autonómico— y frente a la concesión de 1975, que se entiende caducada; además se incluye la pretensión de restaurar el medio natural degradado en el recurso de las asociaciones ambientalistas.

El Tribunal, sin entrar a decidir el fondo del asunto, devuelve la cuestión a la sede administrativa y resuelve estimando el recurso del Ministerio y ordenando a la Administración autonómica la resolución de las solicitudes de revisión de oficio, según el procedimiento pertinente, que incluye la intervención del Consejo Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A todo ello excepciona la petición de caducidad, que advierte debía haber seguido otro procedimiento. El Tribunal aduce que debe ser la Administración autonómica la que pondere todas las circunstancias, una vez se pronuncie el Consejo Jurídico, con lo que se pierde la oportunidad de encontrar una interpretación judicial acerca de la aplicación de las normas de protección del ambiente en relación

con un proyecto basado en una concesión que, por haber sido modificada y habiéndose superado los plazos de ejecución, podría haber sido considerada caducada.

En lo que el Tribunal entra a analizar parcialmente del asunto, destacan las valoraciones sobre la necesidad de contar con un informe favorable de la Administración estatal competente en materia de dominio público marítimo-terrestre (informe de adscripción) conforme a doctrina del Tribunal Constitucional (STC 149/1991, de 7 de abril), para lo que es preciso determinar si la modificación del proyecto ha afectado a la configuración externa del puerto, decisión que debe tomar la Administración autonómica.

La Sentencia de 18 de junio de 2010, de la Sala, referida al recurso de Greenpeace y ANSE, refleja los pareceres de la Sentencia anterior, pero desestima el recurso por carecer de objeto, al no haberse acumulado ambos procedimientos.

Todo lo anterior evidencia que el caso Puerto Mayor, pese a haber sido clarificado por una sentencia más de los tribunales regionales, seguirá dando que hablar hasta que finalmente se decida por las autoridades la conveniencia de las obras y se minimice su impacto ambiental.

2. Antenas de telecomunicaciones: Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 18 de junio de 2010 (Rec. 601/2008)

El litigio que mantienen la empresa Vodafone y el Ayuntamiento de Molina de Segura da lugar a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso, de 18 de junio, de la que es ponente Joaquín Moreno Grau —magistrado especialista— y que analiza la legalidad de una orden municipal de desconexión de una antena que carecía de licencia. El caso se refiere a una situación frecuente ante el *boom* de las telecomunicaciones de telefonía móvil, que ha provocado la instalación de antenas sin el debido control previo municipal.

La empresa se opuso a la desconexión en base a que había adquirido licencia urbanística por silencio administrativo, derecho que el Juzgado de Instancia le negó por haber sido la mercantil requerida por el Ayuntamiento para subsanar deficiencias en 1998, sin que la empresa hubiese atendido tal obligación. El recurso de apelación de Vodafone afirma que el Ayuntamiento se extralimitó en dicho requerimiento y reabre la discusión acerca de las competencias municipales de los ayuntamientos en materia de telecomunicaciones, lo que permite a la Sala sentar correctamente la doctrina tanto del Tribunal Supremo —sentencias de 24 de enero de 2000 (ponente: Fernández Montalvo), de 18 de junio de 2001 (ponente: Xiol), de 15 de diciembre de 2003 (ponente:

Fernández Montalvo) y de 24 de mayo de 2005 (ponente: Herrero Pina)—, como de la propia Sala. Así, aunque es realmente el Estado el que debe fijar los niveles de emisión y los ayuntamientos únicamente podrán controlar dicha emisión, existen otros títulos competenciales locales que permiten a los ayuntamientos limitar la instalación de antenas de telecomunicaciones.

La Sala recuerda la amplitud de la intervención municipal en base a dos aspectos: "uno es el servicio de telecomunicaciones, en sí mismo considerado, y otro es el demanial, en la medida en que la prestación de dicho servicio requiera un indispensable componente de infraestructura que utilice pertenencias del dominio público, singularmente municipal. La regulación adecuada de la utilización del dominio público por parte de las empresas de servicios es una cuestión esencial dada la saturación y el desorden que puede producirse en las instalaciones [...]. En suma, no es posible negar a los Ayuntamientos competencia para regular las incidencias derivadas de las obras y actuaciones de las distintas compañías en sus respectivas instalaciones y que pueden representar, incluso, importantes costes para los proyectos municipales".

La competencia municipal se orienta a la preservación de intereses municipales y la normativa de régimen local especialmente concernida es la relativa a bienes y servicios municipales y planeamiento urbanístico: "por consiguiente, los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativos a obras e instalaciones en la vía pública. El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede traducirse, en ningún caso, en restricciones absolutas al derecho de los operadores al uso u ocupación del dominio público municipal, ni siquiera en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. Por ello, puede resultar útil, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Sala, el examen de los preceptos cuestionados desde las perspectivas de los parámetros que sirven para determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho y del interés público que se intenta preservar".

Los ayuntamientos pueden establecer en el planeamiento urbanístico, por consiguiente, "condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e instalaciones en la vía pública o de 'calas y canalizaciones' o instalaciones en edificios [...]

tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos (artículo 25. 2. *a*), ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas (artículo 25. 2. *b*), protección civil, prevención y extinción de incendios (artículo 25. 2. *c*), ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (artículo 25. 2. *d*), protección del medio ambiente (artículo 25. 2. *f*), patrimonio histórico-artístico (artículo 25. 2. *e*) y protección de la salubridad pública (artículo 25. 2. *f*)".

Tras este despliegue doctrinal de títulos competenciales para la intervención municipal, el Tribunal desestima el recurso de Vodafone, ya que la alegación en que se basa se refiere a un punto muy concreto, el de los niveles de emisión radioeléctrica, pero concurren otros muchos títulos que habilitan al Ayuntamiento para requerir la información que se pidió al solicitante el 22 de enero de 1998 y que este dejó de atender.

3. Ruidos: Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 25 de junio de 2010 (Rec. 606/2008)

En esta resolución la Sala, atendiendo a una situación de contaminación acústica y de vulneración del derecho humano a la intimidad, en concurrencia con una falta de licencia para utilizar equipos de música por parte de una cafetería en Cartagena y el incumplimiento de dos decretos municipales del 2007, estima parcialmente el recurso interpuesto por los vecinos y acuerda la medida cautelar denegada en primera instancia consistente en el precintado del equipo de música y el futbolín.

Para llegar a esta conclusión, la Sala tiene en cuenta que las inmisiones sonoras "pueden constituir una vulneración de derechos fundamentales importantes, como es el derecho a la intimidad, partiendo de la conocida sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso López Ostra contra España (STEDH de 9 de diciembre de 1994). Por tanto, en la valoración de los intereses en conflicto se ha de ser especialmente sensible a este problema".

4. Costas: Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Murcia de 8 de julio de 2010 (Rec. 65/2006)

Esta sentencia, referida a la impugnación de una sanción en materia de costas impuesta a una vivienda situada junto al paseo marítimo de Los Nietos, en el Mar Menor, realiza una interpretación de las competencias en relación con el espacio litoral y centra la eventual infracción —construcción por encima del contenido de la licencia de obra menor autorizada por el Ayuntamiento de Cartagena

con informe previo de la Demarcación de Costas— en la zona de servidumbre de protección, sin coincidir con la servidumbre de tránsito, lo que supone la competencia, conforme a la legislación y a la interpretación dada por el Tribunal Constitucional (STC 149/1991, de 4 de julio), de los órganos de la Comunidad Autónoma.

Por todo ello, declara nula la sanción impuesta por la Demarcación de Costas del Estado, al constar acreditada la exacta ubicación de la vivienda y la urgencia de las obras, todo ello en relación con las disposiciones transitorias de la Ley de Costas, así como el deslinde provisional aprobado en el año 1985.

5. Vertidos: sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 28 de julio (Rec. 780/2005) y de 24 de septiembre de 2010 (Rec. 3261/2003)

Ambas sentencias se ocupan de sanciones a explotaciones porcinas en materia de vertidos, impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura, que terminan siendo declaradas nulas por similares defectos referidos a la vulneración del principio de tipicidad, que supone sancionar conductas no contempladas en los tipos sancionadores de la legislación de aguas: en este caso, el mero hecho de verter. Como fue referido en la anterior crónica jurisprudencial, llama la atención la debilidad de la actividad probatoria del Organismo de Cuenca en una materia tan relevante como los vertidos a masas de agua con poco caudal y la subsiguiente facilidad de empresas autoras de vertidos para eludir las sanciones y la aplicación del principio de que quien contamina, paga.

La Sala se remite a sentencias previas como la de 23 de junio de 2006 en la que, aunque se declara probada la existencia de vertido no autorizado, se considera esencial para que el vertido sea constitutivo de infracción, conforme a la Ley de Aguas (artículos 100 y 116) y al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que este sea susceptible de contaminar, lo que conlleva la obligación de la Administración (que en materia sancionadora tiene la carga de la prueba) de probar el grado de contaminación ocasionado sobre los terrenos o las aguas subterráneas o la degradación del entorno. Aunque entendemos que estamos, como en materia de los delitos ecológicos, ante infracciones de riesgo, en las que no es necesario probar un daño concreto sino la capacidad del vertido de generarlo, nos encontramos con que la Confederación Hidrográfica del Segura en los casos referidos ni siquiera ha aportado al expediente evidencias al respecto de la peligrosidad.

Por otro lado, en el caso de que se produzcan daños, la valoración de estos se convierte en parámetro para la graduación de la sanción impuesta y el Tribunal detecta que tampoco obran en el expediente tales valoraciones, lo que supone una actitud preocupante del organismo de cuenca, puesto que se limita a iniciar expedientes sancionadores cuando detecta vertidos, sin aportar a los procedimientos una mínima prueba de su peligrosidad para la calidad de las aguas o una valoración de los daños ambientales provocados, lo que entra en contradicción con los medios de los que dispone la Comisaría de Aguas y puede suponer un incumplimiento de sus deberes de policía.

Además de la consecuente nulidad de las sanciones, por un obrar poco diligente en el ejercicio de la potestad sancionadora del organismo de cuenca, en relación con los vertidos se podría estar manteniendo la sensación de impunidad que ha acompañado a esta regulación desde su entrada en vigor, especialmente en la cuenca del Segura.

Sumari: 1. Ports i medi ambient: sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia de 21 de maig (rec. 122/2005) i de 18 de juny de 2010 (rec. 276/2005). 2. Antenes de telecomunicacions: Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 18 de juny de 2010 (rec. 601/2008). 3. Sorolls: Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 25 de juny de 2010 (rec. 606/2008). 4. Costes: Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia de 8 de juliol de 2010 (rec. 65/2006). 5. Abocaments: sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 28 de juliol (rec. 780/2005) i de 24 de setembre de 2010 (rec. 3261/2003).

L'anàlisi de l'activitat jurisdiccional referida a l'aplicació del dret ambiental a la Regió de Múrcia en aquest semestre passa per analitzar fonamentalment les sentències de la Sala Contenciosa Administrativa, atesa l'escassetat de pronunciaments en matèria de delictes ecològics o responsabilitat per danys a l'ambient en altres seus jurisdiccionals.

L'estudi de les resolucions d'aquest Tribunal ens permet comprovar quins conflictes accedeixen als tribunals regionals en aquest trimestre, excepte pel que fa a un projecte de port esportiu que afecta l'interès públic i la defensa del dret humà a la intimitat en relació amb el soroll, podem indicar que la majoria han tingut a veure amb la defensa d'interessos privats no ambientals pel que fa a les feines de policia ambiental que tenen a veure amb l'ordre de desinstal·lació d'una antena de telefonia mòbil, la imposició de sancions en matèria de costes o abocaments al medi aquàtic, o bé afers referents a subvencions i ajudes agrícoles.

1. Ports i medi ambient: sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia de 21 de maig (rec. 122/2005) i de 18 de juny de 2010 (rec. 276/2005)

Inicialment trobem un cas referent al projecte d'un nou port esportiu a la Màniga del Mar Menor que, ja que es tracta d'un conflicte entre administracions i, en part amb la societat civil, representada per grups de conservació de la natura com Greenpeace i l'Associació de Naturalistes del Sud-Est, serveix com a botó de mostra de la política ambiental en relació amb decisions sobre infraestructures amb gran impacte. Les accions judicials, malgrat ser similars, es van plantejar separadament i van generar les sentències de 21 de maig i de 18 de juny de 2010.

El cas de "Puerto Mayor" és un cas complex des del punt de vista procedimental —que a més a més ha generat dues sentències del Tribunal Suprem— a què s'afegeixen qüestions competencials i la qüestió de l'aplicació sobrevinguda de normes ambientals a un projecte portuari aprovat amb anterioritat a l'entrada en vigor de normes essencials per a l'avaluació ambiental dels projectes o de protecció de la biodiversitat marina. La resolució d'aquesta conjuntura, amb innegable impacte socioeconòmic i ambiental en una zona litoral en què l'equilibri d'usos és crucial, ha suposat, a més

a més, un conflicte sociopolític i competencial que subjau a la decisió judicial, ja que afecta el domini públic maritimoterrestre i el medi natural. Les obres es van suspendre mitjançant l'adopció de la mesura cautelar el 17 de març de 2005, confirmada posteriorment pel Tribunal Suprem.

El projecte de port esportiu a l'Estacio es basa en la concessió de 4 de juliol de 1975, havent-se prorrogat el termini d'execució en dues ocasions i el projecte modificat mitjançant la Resolució administrativa autonòmica de 16 de desembre de 1988. L'execució del port la va suspendre posteriorment l'extinta Agència Regional de Medi Ambient a l'abril de 1989, i aquesta suspensió va ser alçada per ordre del director general de Qualitat Ambiental el 2003. La qüestió ambiental de fons, més enllà del que fa referència a la legislació en matèria de ports, es refereix a l'existència o no de l'adequada avaluació ambiental de l'obra, atesa la presència d'hàbitats comunitaris marins als voltants del projecte (*Poseidonia oceanica*), la qual cosa va generar denúncies per part del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil un cop iniciades les obres a l'abril de 2004. Ha de remarcar-se que el projecte modificat del port incloïa construir habitatges, la qual cosa suposava una activitat urbanística més enllà de la portuària.

L'objecte de la controvèrsia judicial, no obstant això, es va basar en la desatenció per part de l'òrgan autonòmic de tres sol·licituds de revisió presentades tant pel Ministeri de Medi Ambient com per les dues associacions de protecció de la natura enfront de l'alçament de la suspensió el 2003, enfront de la modificació del projecte el 1988, contrari a la normativa d'avaluació d'impacte ambiental en vigor des de 1986 d'acord amb informes interns de l'òrgan autonòmic, i davant de la concessió de 1975, que s'entén caducada; a més a més, s'inclou la pretensió de restaurar el medi natural degradat en el recurs de les associacions ambientalistes.

El Tribunal, sense entrar a decidir el fons de l'afer, torna la qüestió a la seu administrativa i resol estimant el recurs del Ministeri i ordenant a l'Administració autonòmica la resolució de les sol·licituds de revisió d'ofici, segons el procediment pertinent, que inclou la intervenció del Consell Jurídic de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. A tot això exceptua la petició de caducitat, que adverteix que havia d'haver seguit un altre procediment. El tribunal addueix que ha de ser l'Administració autonòmica la que ha de ponderar totes les circumstàncies, un cop es pronuncir el Consell Jurídic i es perd l'oportunitat de trobar una interpretació judicial sobre l'aplicació de les normes de protecció de l'ambient en relació a un projecte basat en una concessió, que, per haver estat modificada i havent-se superat els terminis d'execució, podria haver estat considerada caducada.

Pel que fa al que el Tribunal entra a analitzar parcialment de l'afer, destaquen les valoracions sobre

la necessitat de disposar d'un informe favorable de l'Administració estatal competent en matèria de domini públic maritimoterrestre (informe d'adscripció) d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 149/1991, de 7 d'abril), per a la qual cosa cal determinar si la modificació del projecte ha afectat la configuració externa del port, decisió que ha de prendre l'Administració autonòmica.

La Sentència de 18 de juny de 2010 de la Sala, referent al recurs de Greenpeace i ANSE, reflecteix els parers de la sentència anterior, però desestima el recurs perquè no té objecte, ja que no s'han acumulat ambdós procediments.

Tots els punts anteriors evidencien que el cas "Puerto Mayor", malgrat haver estat aclarit per una sentència més dels tribunals regionals, continuarà fent parlar fins que finalment les autoritats decideixin la conveniència de les obres i se'n minimitzi l'impacte ambiental.

2. Antenes de telecomunicacions: Sentència de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia de 18 de juny de 2010 (rec. 601/2008)

El litigi que mantenen l'empresa Vodafone i l'Ajuntament de Molina de Segura dóna lloc a la Sentència de la Sala Contenciosa de 18 de juny, de la qual és ponent Joaquín Moreno Grau — magistrat especialista— i que analitza la legalitat de l'ordre municipal de desconnexió d'una antena que no tenia llicència. El cas es refereix a una situació freqüent davant el boom de les telecomunicacions de telefonia mòbil que ha provocat la instal·lació d'antenes sense previ control municipal.

L'empresa es va oposar a desconnectar-la basant-se que havia adquirit llicència urbanística per silenci administratiu, dret que el Jutjat d'Instància li va negar per haver estat la mercantil requerida per l'Ajuntament per esmenar deficiències el 1998, sense que l'empresa hagués atès l'obligació. El recurs d'apel·lació de Vodafone afirma que l'Ajuntament es va extralimitar en el requeriment i reobre la discussió sobre les competències municipals dels ajuntaments en matèria de telecomunicacions, la qual cosa permet a la Sala establir correctament la doctrina tant del Tribunal Suprem —sentències de 24 de gener de 2000 (ponent: Fernández Montalvo); de 18 de juny de 2001 (ponent: Xiol); de 15 de desembre de 2003 (ponent: Fernández Montalvo), i de 24 de maig de 2005 (ponent: Herrero Pina)—, com de la mateixa Sala. Així, tot i que realment és l'Estat el que ha de fixar els nivells d'emissió, i els ajuntaments únicament podran controlar-los, hi ha altres títols competencials locals que permeten als ajuntaments limitar la instal·lació d'antenes de

telecomunicacions.

La Sala recorda l'amplitud de la intervenció municipal basant-se en dos aspectes: "uno es el servicio de telecomunicaciones, en sí mismo considerado, y otro es el demanial, en la medida en que la prestación de dicho servicio requiera un indispensable componente de infraestructura que utilice pertenencias del dominio público, singularmente municipal. La regulación adecuada de la utilización del dominio público por parte de las empresas de servicios es una cuestión esencial dada la saturación y el desorden que puede producirse en las instalaciones... En suma, no es posible negar a los Ayuntamientos competencia para regular las incidencias derivadas de las obras y actuaciones de las distintas compañías en sus respectivas instalaciones y que pueden representar, incluso, importantes costes para los proyectos municipales".

La competència municipal s'orienta a preservar els interessos municipals, i la normativa de règim local especialment concernida és la relativa a béns i serveis municipals i planejament urbanístic: "por consiguiente, los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativos a obras e instalaciones en la vía pública. El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede traducirse, en ningún caso, en restricciones absolutas al derecho de los operadores al uso u ocupación del dominio público municipal, ni siquiera en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. Por ello, puede resultar útil, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Sala, el examen de los preceptos cuestionados desde las perspectivas de los parámetros que sirven para determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho y del interés público que se intenta preservar".

Per tant, els ajuntaments poden establir en el planejament urbanístic "condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e instalaciones en la vía pública o de «calas y canalizaciones» o instalaciones en edificios... tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos (artículo 25. 2. a), ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas (artículo 25. 2. b), protección civil, prevención y extinción de incendios (artículo 25. 2. c), ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (artículo 25. 2. d), protección del medio ambiente (artículo 25. 2. f), patrimonio

histórico-artístico (artículo 25. 2. e) y protección de la salubridad pública (artículo 25. 2. f)".

Després d'aquest desplegament doctrinal de títols competencials per a la intervenció municipal, el Tribunal desestima el recurs de Vodafone, ja que l'al·legació en què es basa es refereix a un punt molt concret, el dels nivells d'emissió radioelèctrica, però concorren molts altres títols que habiliten l'Ajuntament per requerir la informació que es va demanar al sol·licitant el 22 de gener de 1998 i que aquest va deixar d'atendre.

3. Sorolls: Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 25 de juny de 2010 (rec. 606/2008)

En aquesta resolució, la Sala, atenent una situació de contaminació acústica i de vulneració del dret humà a la intimitat, en concurrència amb la falta de llicència per haver utilitzat equips de música per part d'una cafeteria a Cartagena i l'incompliment de sengles decrets municipals de 2007, estima parcialment el recurs interposat pels veïns i acorda la mesura cautelar denegada en primera instància consistent a precintar l'equip de música i el futbolí.

Per arribar a aquesta conclusió, la Sala té en compte que les immisions sonores "pueden constituir una vulneración de derechos fundamentales importantes, como es el derecho a la intimidad, partiendo de la conocida sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso López Ostra contra España (STEDH de 9 de diciembre de 1994). Por tanto, en la valoración de los intereses en conflicto se ha de ser especialmente sensible a este problema".

4. Costes: Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia de 8 de juliol de 2010 (rec. 65/2006)

Aquesta sentència, referida a la impugnació d'una sanció en matèria de costes imposada a un habitatge situat al costat del passeig marítim de Los Nietos, al Mar Menor, realitza una interpretació de les competències en relació amb l'espai litoral i centra l'eventual infracció —construcció per sobre del contingut de la llicència d'obra menor autoritzada per l'Ajuntament de Cartagena amb informe previ de la Demarcació de Costes— a la zona de servitud de protecció, sense coincidir amb la servitud de trànsit, la qual cosa suposa la competència, conforme a la legislació i a la interpretació donada pel Tribunal Constitucional (STC 149/1991, de 4 de juliol), dels òrgans de la comunitat autònoma.

Per tot això, declara nul·la la sanció imposada per la Demarcació de Costes de l'Estat, ja que la

ubicació exacta de l'habitatge i la urgència de les obres consten acreditades, tot això en relació amb les disposicions transitòries de la llei de costes així com la delimitació provisional aprovada l'any 1985.

5. Abocaments: sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 28 de juliol (rec. 780/2005) i de 24 de setembre de 2010 (rec. 3261/2003)

Ambdues sentències s'ocupen de sancions a explotacions porcines en matèria d'abocaments, imposades per la Confederació Hidrogràfica del Segura que s'acaben declarant nul·les per defectes similars referents a la vulneració del principi de tipicitat, que suposa sancionar conductes no previstes en el tipus sancionadors de la legislació d'aigües: en aquest cas, el mer fet d'abocar. Com vam esmentar en l'anterior crònica jurisprudencial, crida l'atenció la debilitat de l'activitat probatòria de l'organisme de conca en una matèria tan rellevant com els abocaments a masses d'aigua amb poc cabal i la subsegüent facilitat d'empreses autores d'abocaments per eludir les sancions i l'aplicació del principi de qui contamina, paga.

La Sala remet a sentències prèvies com la de 23 de juny de 2006, en la qual, tot i que es declara provada l'existència d'un abocament no autoritzat, es considera essencial perquè l'abocament sigui constitutiu d'infracció, d'acord amb la llei d'aigües (articles 100 i 116) i amb el Reglament de domini públic hidràulic, que aquest sigui susceptible de contaminar, cosa que comporta l'obligació de l'Administració (que en matèria sancionadora té la càrrega de la prova) de provar el grau de contaminació dels terrenys o de les aigües subterrànies o de la degradació de l'entorn. Encara que entenem que estem, com en matèria dels delictes ecològics, davant d'infraccions de risc, en les quals no cal provar cap dany concret sinó l'aptitud de l'abocament de generar-lo, ens trobem que la Confederació Hidrogràfica del Segura en els casos esmentats ni tan sols ha aportat evidències respecte de la perillositat a l'expedient.

D'altra banda, en cas que es produeixin danys, la seva valoració es converteix en un paràmetre per graduar la sanció imposada, i el Tribunal detecta que aquestes valoracions tampoc no obren en l'expedient, la qual cosa suposa l'actitud preocupant de l'organisme de conca, ja que es limita a iniciar expedients sancionadors quan detecta abocaments, sense aportar als procediments una prova mínima de la seva perillositat per a la qualitat de les aigües o una valoració dels danys ambientals provocats, la qual cosa entra en contradicció amb els mitjans de què disposa la Comissaria d'Aigües i pot suposar l'incompliment dels seus deures de policia.

A més de la consequent nul·litat de les sancions, pel fet d'obrar de manera poc diligent en l'exercici de la potestat sancionadora de l'organisme de conca, en relació amb abocaments, es podria estar mantenint la sensació d'impunitat que ha acompanyat aquesta regulació des de la seva entrada en vigor, especialment en la conca del Segura.